

“El poder de la religión, como empresa simbólica que promete la salvación, reside en su autoridad para crear y dar forma a la realidad de sus creyentes y exhortarlos a la obediencia” Así comienza *“El lobo dentro del rebaño: liderazgos religiosos y abuso de poder”*, de Anson D. Shupe, sociólogo de la Universidad de Purdue y especialista en asuntos religiosos.

En un momento donde se habla mucho de los abusos sexuales que se han producido en el interior de la iglesia y, sobre todo, de la manera en que se han gestionado, creo que resulta pertinente recordar estas líneas. Ellas encierran una lección sobre la construcción de un capital simbólico por parte de la iglesia y de su intento de manejar a la Opinión Pública. Es un desafío intentar desentrañar el escándalo que envuelve a la jerarquía católica en los últimos tiempos y, hacerlo siguiendo una guía como las zonas de representación, además de esclarecer el asunto, nos lleva a cuestiones muy interesantes.

Empecemos por los hechos. En septiembre pasado el arzobispo Silvano María Tomasi, observador permanente de la Santa Sede en la ONU, reconoció que *“en los últimos 50 años un porcentaje entre el 1,5% y el 5% del clero católico se ha visto envuelto en casos de abusos sexuales”*. De acuerdo con esta declaración han ido saliendo en los medios de comunicación un rosario de víctimas, denunciando a sus ofensores y a quienes los han encubierto durante muchos años. Con la teoría de las zonas de representación desmenuzaremos la actuación de la iglesia católica en todo este asunto, tanto interior como exteriormente.

Hoy es casi de público conocimiento una nota de marzo de 1962 de lo que antes era la Inquisición o Santo Oficio, y hoy se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. El documento, *“Instrucción sobre el modo de proceder con las causas de solicitud”*, está firmado por el cardenal Alfredo Ottaviani y aprobado por Juan XXIII. Manipulado por unos y otros, lo cierto es que en el párrafo 11 del mismo se decreta el *secreto del Santo Oficio*, la forma más estricta de secreto en el derecho canónico, cuya ruptura está penada con la excomunión. Entendiendo que este documento es para los arzobispos, obispos y superiores ordinarios, podemos inferir que denota un corte de información en una dimensión privada, es decir un intento de controlar la información que se podía transmitir de la iglesia ocultando los aspectos nada halagüeños de sórdidos delitos.

Siguiendo por esta senda de corte de información pero asomándonos ya a la dimensión pública, también nos encontramos con ejemplos prístinos de censura, pues solo cabe calificar como tal los acuerdos extrajudiciales que indemnizaban a las víctimas a cambio de la confidencialidad. Esos pagos, que forzaron la bancarrota de algunas diócesis norteamericanas, ejercen la función coercitiva que antaño permitía impedir publicaciones peligrosas para la institución. También existe una autocensura curiosa en los medios de comunicación próximos por cuestiones de propiedad (Popular TV, Cope, L’Osservatore Romano) o por afinidades ideológicas (ABC, La Razón, La Gaceta, etc.) Estos acólitos minimizan, o ignoran deliberadamente, noticias cuyo interés informativo es evidente cuando puede resultar de ellas un perjuicio para la iglesia católica.

Llegados al estudio de los flujos de información de la iglesia entraremos en primer lugar en las confidencias, es ahí donde las cosas que inquietan, como la instrucción secreta de 1962, se vuelven un poco menos privadas en un intento de explicar, de poner en contexto, de limitar daños. En ese contexto podemos hablar de confidencia en la misma declaración de Arzobispo Tomasi, reconociendo una incidencia de pedófilos y/o efebófilos en la iglesia entre el 1,5% y el 5%, cuando varios autores, como por ejemplo el profesor de la Universidad de Stanford Thomas Plante, afirman que la incidencia “*es significativamente menor que la incidencia estimada en la población adulta general que ronda el 8%*”. El caso Hullerman que salpica al propio Benedicto XVI, cuando era arzobispo de Múnich, resulta esclarecedor después de las investigaciones del *New York Times* y del *Bild*. Según la documentación disponible el responsable de la ocultación, traslado, y sostenimiento en la iglesia, del abusador fue el actual papa. Con el objetivo de limitar daños, se ha filtrado que fue todo obra del vicario general de la diócesis. Ratzinger no habría tenido ningún papel activo en el caso, solo habría cometido una leve falta de desatención, entendible por el volumen de asuntos a tratar por su cargo.

Donde la iglesia no ha hecho honor a su fama de secretismo y ocultación es en las respuestas públicas que intenta dar a este escándalo. Como si dispusiese de un plan de contingencia para este tipo de situaciones de crisis, ha intentado hacer gala de sus actuaciones contra la causa última de todo este escándalo: los abusos a menores por parte de los sacerdotes católicos. Así han llenado los medios las modificaciones al derecho canónico de 1983, que tipifican expresamente (anteriormente se incluía en el caso general de la sollicitación) como delito el abuso sexual a menores (canon 1395, 2). También han vuelto a la actualidad el “*Salvaguardando la Santidad de los Sacramentos*” que publicó Juan Pablo II en abril de 2001, y la carta que el actual pontífice, entonces Prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, dirigió a todos los responsables eclesiásticos “*Sobre los delitos más graves*” donde endurecía los plazos de prescripción y situaba todos estos casos en la jurisdicción de su dicasterio. Igualmente ha tenido una amplia difusión la carta que el papa ha publicado el 20 del pasado mes pidiendo perdón por todo este asunto.

En este caso concreto más que las distintas zonas de presentación ya analizadas es necesario ver la línea temporal: como ha ido desarrollándose el asunto. Tomando como marco de referencia el que se propone mayoritariamente, los últimos 50 años, es revelador comprender como la iglesia ha ido recorriendo todas las zonas desde el hermetismo, abriéndose de manera gradual, o siendo obligada a abrirse, según el conocimiento por el público de los hechos, no los hechos en sí. Se empieza con el secreto, connatural a la iglesia, guardando toda información perjudicial si se difundiese. Eso basta, mientras es factible el ocultar las cosas y se ponen herramientas para ello en el derecho canónico y en instrucciones particulares. Resquebrajada esta primera línea de defensa, con las herramientas para el secreto (amenazas de excomunión, traslados, reclusiones, etc.) y con nuevos elementos (documentos legales que a cambio de dinero

aseguran confidencialidad) se censurara todo aquello que resulta molesto o inconveniente.

Después, obligados a adoptar posturas públicas por las dimensiones del caso, se hacen confidencias, se filtran datos a periodistas “comprensivos”, y se realizan las primeras declaraciones intentando limitar los daños a la iglesia. Cuando el deterioro es más evidente, se emprenden verdaderas campañas publicitarias de lavado de imagen, a las que se añaden todos los ingredientes posibles para que resulten exitosas: un levísimo reconocimiento de culpa, un alud de supuestas pruebas documentales de las medidas que la iglesia ha tomado para erradicar el fenómeno y un buen aliño de victimismo ante una pretendida conspiración.

Siempre que entendamos la publicidad como el intento de presentar una buena imagen de algo, los múltiples errores de comunicación en los que ha incurrido la iglesia cuando se ha decidido a hacer declaraciones públicas son curiosos: ahí tienen su lugar de honor el incalificable Predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalinoso, que comparó el tratamiento de los medios de comunicación de los casos de pederastia con el antisemitismo, también reclama protagonismo el pintoresco exorcista jefe del Vaticano, el padre Amorth, atreviéndose a decirle al *New York Times* hace tres días que todo es una campaña “*inspirada por el diablo*” porque quiere “*echarle mano*” a un “*papa maravilloso y digno sucesor de Juan Pablo II.*”

Frente a esas frivolidades encontramos también intentos genuinos de reflexión como el del actual Primado de Irlanda, Diarmuid Martin, que en una misa de esta semana santa decía: “*Este ha sido una año difícil. Vemos ahora lo dañino que es para el cuerpo de Cristo la falta de integridad y autenticidad. Vergonzosos abusos han tenido lugar dentro de la iglesia de Cristo. La respuesta fue desesperanzadoramente inadecuada.*” En este intento de recuperar crédito ante la OP Kieran Conry, un obispo inglés, escribía en *Newsweek* hace poco más de una semana un artículo esclarecedor donde entre otras cosas decía que “*Cuánto daño se ha hecho es algo difícil de medir. La reputación de la iglesia a ojos del mundo laico ha sufrido indudablemente, pero la iglesia nunca ha estado demasiado preocupada por la imagen dentro y sobre sí misma. Pero (...) no puede ignorar por completo la cuestión de la imagen.*”

A la iglesia le está costando encajar en el mundo de hoy, sus estructuras son demasiado rígidas para conservar el capital simbólico que habían conseguido acumular en sus dos milenios de actuación. Conservan el dinero, puesto que a pesar de casos como la Banca Ambrosiana del arzobispo Marzinkus, o las bancarrotas procedimentales en los EE.UU a causa de las indemnizaciones, siguen recibiendo el apoyo económico de fieles y estados para una situación financiera bastante desahogada. En cuanto al capital cultural es inmenso, porque más allá de los extraordinarios tesoros que posee, de su contribución a conformar la cultura de buena parte del mundo, están el inmenso capital que representan las instituciones educativas que gestiona o patrocina, en casi todos los casos lugares de indudable excelencia académica. El problema se plantea en toda su crudeza

cuando la iglesia se ve obligada a defender algo que daba por preexistente e inatacable: su capital simbólico.

Desde su nacimiento, por su propia naturaleza y por todo tipo de procedimientos (unos más elegantes y legítimos que otros) se ha ido construyendo una auto-imagen idílica, una especie de fantasía que pretendía suplantar a lo real y cuando se ha visto desnuda, como el rey del cuento de Andersen, le han faltado herramientas y agilidad para solucionarlo como institución poco democrática y transparente que es.

Se encuentra con un nuevo tipo de realidad a la que le cuesta responder a pesar de su potencia para la formación de mensajes en la esfera pública, su influencia ha descendido en general, como el número de fieles en las sociedades más desarrolladas que es donde se producen, y se destapan, escándalos como el que nos ocupa. También ha adolecido de la experiencia y preparación necesaria para afrontar un debate notorio y siempre vertiginoso de sus procedimientos internos. Muchos años de oscurantismo han conseguido que se vea superado por la avalancha de críticas por parte de gente mucho más acostumbrada a la publicidad. Además tiene que luchar contra la propia reflexividad de la nueva OP, que sobre la actuación de la iglesia en este caso reconstruye casi diariamente la imagen que se proyecta de la institución en la sociedad y, por ahora la, imagen que transmite aparenta ser más importante que la realidad para la jerarquía católica.

Cuentan que cuando Napoleón Bonaparte negociaba el Concordato de 1801, le dijo al cardenal Consalvi, si era consciente de que tenía poder para destruir la iglesia. El legado papal respondió que *“nosotros, el clero católico, hemos hecho todo lo posible para destruir la iglesia durante los últimos 1800 años. No hemos tenido éxito, tampoco lo tendrá Vd.”* No creo que esto consiga acabar con ellos, pero los ha zambullido por entero en la realidad de la vida actual, donde además de hacer las cosas bien deben defender su actuación sin fiarse de que toda su historia los respalde siempre.